



[La Fábrica de 'Nuevos Españoles': El Gobierno Dispara las Nacionalizaciones con Marruecos a la Cabeza](#)

AEC

23/03/2026

¿Quién es hoy ciudadano español? La pregunta ha dejado de tener una respuesta evidente. Bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, la concesión de la nacionalidad se ha convertido en una herramienta de ingeniería social y demográfica, una transformación silenciosa cuyas consecuencias a largo plazo nadie ha evaluado. Los datos oficiales no solo lo confirman, sino que alarman.



Dato Clave: Cifras de una Transformación Radical

Según la [última estadística del INE \(datos de 2023\)](#), se concedieron **240.208 nuevas nacionalidades españolas**, un 32,3% más que el año anterior. De ellas, un abrumador **84,5%** correspondía a personas que residían previamente en el extranjero. Es decir, casi 9 de cada 10 nuevos compatriotas no nacieron en España.

Un Cambio de Paradigma Impulsado desde el

Gobierno

Lejos de ser un fenómeno espontáneo, este incremento responde a una estrategia política deliberada. El Gobierno y sus socios han flexibilizado las vías de acceso a la nacionalidad, convirtiendo un derecho que debería ser el culmen de un proceso de integración en un trámite administrativo masivo. El perfil del ‘nuevo español’ ya no responde a lazos históricos o culturales profundos, sino a la nacionalidad de origen y a las facilidades legales que se le otorgan.

Las comunidades autónomas que actúan como principales receptoras de esta política son, previsiblemente, **Cataluña (60.860) y Madrid (50.038)**, que juntas concentran casi la mitad de las nuevas nacionalidades, evidenciando los polos de atracción de la inmigración y, a su vez, los principales focos de los retos sociales y de cohesión que esta política genera.

Las Vías de Acceso: Coladeros Legales y Privilegios

El discurso oficial habla de ‘integración’, pero la realidad jurídica muestra un sistema de privilegios y atajos. Mientras que la vía general exige una década de residencia legal, existen excepciones que desvirtúan por completo el principio de igualdad y mérito.

Nacionalidad a la Carta

El Código Civil establece un plazo general de 10 años de residencia. Sin embargo, este se reduce a solo **2 años para nacionales de países iberoamericanos**, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal. Esta discriminación positiva explica el aluvión de solicitudes de Venezuela y Colombia. A esto se suman leyes ideológicas como la **Ley de Memoria Democrática**, que ha abierto otra puerta trasera para descendientes, sin exigir residencia ni vínculos reales con la España actual, generando un efecto llamada de consecuencias imprevisibles.

El caso más preocupante es el de **Marruecos**, que con **54.026 nuevos españoles** en un solo año, lidera la estadística. A diferencia de los hispanoamericanos, los ciudadanos marroquíes deben cumplir, en teoría, el plazo de 10 años. Sin embargo, la presión demográfica y las cesiones políticas del Gobierno de Sánchez al reino alauí han creado un clima de permisividad que acelera estos procesos sin las debidas garantías de integración y lealtad constitucional.

La Realidad: ¿Integración o Creación de Guetos?

El Gobierno vende la nacionalización masiva como un éxito de integración. La realidad en muchos barrios de grandes ciudades es otra: comunidades cerradas que no se rigen por los valores occidentales, donde la ley española es secundaria y la cohesión social se desvanece. Otorgar la nacionalidad sin exigir una adhesión real a los principios de una sociedad

libre es un acto de profunda irresponsabilidad.

El Falso Mito de las Pensiones y el Cálculo Electoralista

Se repite como un mantra que esta inmigración es vital para sostener el sistema de pensiones. Este argumento es, en el mejor de los casos, una verdad a medias. Una parte significativa de la inmigración que llega a España es de baja cualificación, con empleos precarios y salarios bajos, lo que se traduce en contribuciones mínimas a la Seguridad Social. A largo plazo, muchos de ellos se convertirán en perceptores netos de ayudas y servicios públicos, generando más presión sobre un Estado de Bienestar ya quebrado.

«No se puede sostener un sistema de pensiones con empleos de bajo valor añadido. La clave es la productividad, no la demografía indiscriminada. Importar pobreza para pagar las pensiones es un pan para hoy y hambre para mañana.»

– *Análisis recurrente en círculos de economistas liberales.*

Detrás de la retórica humanitaria se esconde un cálculo político evidente. Un nuevo electorado, a menudo dependiente de las ayudas estatales y ajeno a las tradiciones políticas españolas, es

potencialmente más receptivo a los mensajes populistas y clientelares de la izquierda. La nacionalización masiva no es solo una política demográfica; es una inversión electoral a largo plazo.

Mientras España se transforma a un ritmo vertiginoso, el debate público ha sido secuestrado. Cuestionar este modelo es ser tachado de xenófobo. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿estamos construyendo una sociedad más próspera y cohesionada, o simplemente importando problemas futuros a cambio de un alivio demográfico ficticio y un puñado de votos?